

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

EMPRESAS Y ORGANISMOS DE ENERGIA ELECTRICA

• PROYECTO

1986

ING. PEDRO A. MARIN

FUNDAMENTOS

La necesidad de promulgación de una Ley que dote a la República Argentina de un Ordenamiento que optimice el desenvolvimiento del sistema electroenergético, nos lleva a plantear algunas ideas que fundamenten un proyecto / de organización del sector. Este proyecto deberá definir con claridad las actividades, tanto políticas como empresarias, las competencias y participación de los diversos entes que operan en el sector y todo lo concerniente a la jurisdicción en materia de servicio público de electricidad.

Es precisamente en el tema de la jurisdicción, entendida como potestad o conjunto de competencias en un órgano de poder para cumplir determinadas actividades, donde se presentan en la actualidad las mayores controversias, pues las soluciones propuestas para la organización institucional abarcan una / gama que van desde posiciones extremas de inspiración federal o descentralizantes, hasta posiciones, también extremas, de inspiración unitaria o centralizante.

Para dilucidar la cuestión jurisdiccional es imprescindible remitirse a la Constitución Nacional, porque al ser la Ley Suprema de la Nación y / constituir un todo orgánico en el que se concentran todos los principios fundamentales que organizan la Nación, no hay autoridad ni poder que esté por encima de lo que ella establece.

Es así que ya en su artículo 1º establece la forma federal de organización del Estado, de acuerdo a esto las provincias cedieron por delegación parte de sus funciones y atribuciones al Gobierno Nacional, pero retuvieron determinados poderes que configuran atribuciones exclusivas de ellas como las / mencionadas en los artículos 104, 105 y 106, y otras atribuciones que conforman competencias concurrentes como las del artículo 107.

Del análisis e interpretación de los artículos mencionados, surge nitidamente que en mérito a los poderes reservados por las Provincias, son éstas las titulares del servicio público de electricidad en todas sus etapas y en todo el ámbito de su territorio, mientras que el Estado Nacional, de acuerdo al artículo 67 inciso 27, lo será en la Capital Federal.

La definición del servicio público de electricidad dentro de la jurisdicción local se sustenta no sólo en las cláusulas constitucionales / por las cuales las Provincias retienen la potestad de darse sus propias instituciones locales, sino también en razones históricas, pues fueron los poderes locales, primero los Municipios y luego los Gobiernos Provinciales, quienes otorgaron concesiones o bien administraron durante muchos años y desde sus inicios, este servicio. Esta razón histórica facilita la ubicación constitucional del servicio público de electricidad dentro de las competencias provinciales / no delegadas.

Las características particulares del servicio eléctrico, sobrepasan en algunos aspectos tales como la gran generación, la red nacional de / interconexión, el despacho nacional de cargas o los aprovechamientos internacionales, el marco de los límites provinciales.

Por este motivo, y de acuerdo a las competencias concurrentes fijadas por la Constitución Nacional, es posible y legítimo que las provincias convengan entre sí y con la Nación, mediante tratado, la forma en que habrán / de ejercer sus facultades.

El criterio expuesto facilitará dar solución adecuada y eficiente a todas las cuestiones que plantea la óptima prestación del servicio, / y además debidamente implementado, garantizará a la Nación y a las Provincias el ejercicio pleno e irrestricto de sus respectivas facultades.

No obstante estas claras definiciones, la historia de los últimos años nos muestra serias restricciones impuestas al poder jurisdiccional de las Provincias por actos legislativos del Estado Nacional.

La primera de estas restricciones se dio en 1958 con la sanción de la Ley 14.772 por la que se declararon de jurisdicción nacional, los servicios públicos de electricidad prestados en veintiocho partidos del Gran Buenos Aires. Se fundamentó esto con una interpretación sumamente amplia del artículo 67 incisos 12 y 16 de la Constitución Nacional, la que de aceptarse con tal al-

cance lleva a contrariar nuestra conformación institucional ya que, a medida que el progreso técnico permita la interconexión de distintas zonas del país las mismas deberían ir quedando sujetas a aquella jurisdicción.

En el año 1960 se sancionó la ley 15.336 la que constituyó un nuevo avasallamiento de las atribuciones provinciales por parte del Estado / Nacional, al avanzar éste sobre las competencias de las provincias. Por aplicación de esta ley, cuatro partidos de la Provincia de Buenos Aires fueron / detraídos de la jurisdicción provincial y sometidos a la jurisdicción nacional, regularizando asimismo la actuación de la ex Compañía ITALO Argentina de Electricidad.

En octubre de 1966 se produce otro de los hechos limitatorios de las jurisdicciones provinciales al sancionarse la ley 17.004, la que declaró / de jurisdicción nacional los servicios prestados por Agua y Energía Eléctrica en las provincias y que hasta entonces habían estado supeditados al poder local.

Extendiose así al resto del país la situación que hasta allí estaba circumscrip- / ta a una zona de la Provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia de los actos legales inconstitucionales mencionados, se produjo desde 1966 un proceso por el cual las provincias se vieron obligadas a transferir a Agua y Energía Eléctrica los servicios a cargo de sus / propios entes, también tuvieron el mismo destino otras prestaciones a cargo de numerosas Cooperativas y Municipios.

La promulgación de aquella ley y este proceso de transferencia / determinaron para los gobiernos provinciales la pérdida de todo poder de decisión a nivel político, pues pasó a jurisdicción nacional, y a nivel empresario, porque esta actividad pasó a manos de un organismo propiedad del Estado Nacional.

Toda esta tendencia centralizadora, en menoscabo del poder jurisdiccional local fue realizada en contraposición con las disposiciones constitucionales y los argumentos que la sustentaron fueron rebatidos por el constitu- /

cionalista Germán Bidart Campos, quien expresó:

No basta que una ley como la 14.772, la 15.336 o la 17.004 declare de jurisdicción federal una o varias etapas del proceso eléctrico, o determinados servicios públicos de electricidad, para que tal jurisdicción pueda ser / validamente reconocida. La ley es impotente frente a la constitución, y si acaso federaliza etapas o servicios eléctricos que escapan a su competencia, hay que afirmar rotundamente su inconstitucionalidad. De modo que no es la fórmula legal / de federalización la que subsana discusiones o dudas, porque si con ella se lesionan la jurisdicción y las competencias provinciales, la ley de federalización debe considerarse inconstitucional.

No resiste el análisis de constitucionalidad el intento de centralizar y absorber el servicio público de electricidad en jurisdicción federal exclusivamente; ni el de montar la consiguiente "empresa nacional" con supresión / de las locales, o poniéndolas bajo su dependencia; ni el de extender la jurisdicción federal a todas las etapas del proceso eléctrico en todo el país por el mero hecho de que exista una red nacional de interconexión y de que opere el despacho unificado de cargas.

Hay que tener, pues, precaución en los deslindes, porque la mera / interconexión que implicará transmitir fluido interprovincialmente, o desde un / centro generador de dominio o jurisdicción federales a una o más provincias, sólo sometería a jurisdicción federal las fases del proceso anexas a la interconexión, pero no las que importan disponer del fluido en cada jurisdicción local para los fines del mercado eléctrico también local. Pensamos que una cosa y otra son susceptibles de escindirse, no sólo conceptualmente, sino real y técnicamente.

Por ello las provincias retienen:

- a) el dominio de sus bienes y fuentes de generación eléctrica;
- b) la jurisdicción sobre el proceso eléctrico que, arrancando de / una producción local como la expuesta en el inc. a), cubre sus posteriores etapas circunscribiéndose al ámbito y la "comunicación" exclusivamente provinciales;
- c) La jurisdicción para regular el mercado eléctrico local en las etapas del proceso eléctrico que no caen dentro de la "comunicación" interprovincial o internacional, aun cuando otras etapas, /

la generación o la transmisión, sean acaso de jurisdicción federal;

d) el servicio público implicado en los supuestos de los incisos b) y c)

Por todo lo expuesto hasta el momento, queda demostrado, ya que está avalado por la Constitución Nacional, la coexistencia de una jurisdicción provincial en materia de servicio público de electricidad con competencia sobre las decisiones y actividades locales en la materia, y una jurisdicción nacional con competencia sobre los asuntos que se relacionan con el sistema general.

Por lo tanto, lo particular y local es de jurisdicción provincial, aún la resultante de pactos entre dos jurisdicciones provinciales, y lo general es de jurisdicción nacional. De acuerdo a esto, los sistemas que no excedan el ámbito provincial como la generación local, la subtransmisión, la distribución, la comercialización y atención de usuarios finales caen dentro de la jurisdicción provincial y deberán ser administrados y operados por organismos / locales sujetos a esa jurisdicción. En cambio los sistemas que interrelacionan en forma general a los anteriores o que abastecen al sistema total pertenecen / a la jurisdicción nacional como la generación de módulo nacional, la red de interconexión, el despacho de cargas, los aprovechamientos internacionales, o la planificación del sistema general.

Es necesario aclarar que el sistema total está conformado, de acuerdo a esto, por un sistema general y por varios sistemas particulares o locales.

También es importante dejar sentado que las fuentes de generación de dominio del Estado Nacional y cuyo módulo sobrepase los niveles locales deberán ser consideradas de jurisdicción nacional y que las fuentes de generación de dominio local, aún conectadas a la red nacional de interconexión que se opera según órdenes del despacho nacional de cargas no pierden la jurisdicción provincial en los aspectos ajenos a la interconexión.

A esta altura del análisis, estamos en condiciones de afirmar que deberían descartarse todas las soluciones o proyectos que no respeten o consideren la existencia de las jurisdicciones ya mencionadas, tales como las de inspiración federal o descentralizante que no aceptan la existencia o necesidad de una jurisdicción nacional en relevantes etapas del proceso, pretendiendo la resolución de todo el servicio a través de organismos locales. O bien aquellas de inspiración unitaria o centralizante que por medio de una empresa única o de un conjunto formado por una empresa nacional y varias regionales, todas de jurisdicción nacional, pretendan anular la jurisdicción provincial en la materia y privar a los gobiernos locales de su más importante herramienta / de desarrollo.

Queda así, como única opción posible la que dentro de un marco federal y descentralizante, armonice las jurisdicciones provinciales con la nacional, delimitando las respectivas competencias y coordinando las actividades políticas y empresariales.

Para lograr este objetivo, todo proyecto de ordenamiento del sector, deberá establecer como de jurisdicción provincial, todas las actividades / del servicio público de electricidad que se presten en el ámbito de cada provincia y que sean de módulo local o provincial y muy especialmente las correspondientes a la distribución y comercialización, reservando la exclusividad de la atención de usuarios finales o de cooperativas, cualquiera sea la tensión / de suministro. Deberá contemplar también, el traslado de dominio a las provincias de todas las instalaciones y bienes que las empresas nacionales operan y que reúnan las características ya apuntadas.

En el ámbito nacional, el panorama es un tanto más confuso, pues operan en la actualidad diversas empresas y comisiones con distintos grados de integración y de dependencia. Así tenemos dependiendo del Poder Ejecutivo por / intermedio de la Secretaría de Energía, unidad perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a las Empresas: Agua y Energía Eléctrica, que opera Centros de Generación, la mayor parte de la Red de Interconexión, el Despacho de Cargas y Servicios de Distribución y Comercialización en varias provin-/

cias; Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, con Generación, transmisión distribución y comercialización en Capital Federal, Gran Buenos Aires y otros partidos aledaños; Hidronor, con Generación y Transmisión.

También dependiendo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos pero en forma conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tenemos las empresas binacionales: Comisión Técnica Mixta Salto Grande, con central en operación; Entidad Binacional Yaciretá, en etapa de construcción y la Comisión Argentino Paraguaya del Río Paraná, en etapa de proyecto.

Directamente de la Presidencia de la Nación depende la Comisión / Nacional de Energía Atómica, la que opera dos centrales nucleares.

Todos estos servicios prestados por el Gobierno Nacional, una vez transferidos a las provincias los sistemas ya definidos como de su competencia, / deberán integrarse paulatinamente, pero dentro de un tiempo prudencial, en una sola Empresa que administre la gran generación y el Sistema Argentino de Interco- / nexión, terminando así con la dispersión y anarquía que presenta el sistema ge- / neral.

Con respecto al Despacho de Cargas, subordinado actualmente a una de las empresas, Agua y Energía Eléctrica, por decreto nacional N° 8562/72, estimamos que al ser éste el organismo que regula los intercambios y transacciones entre las empresas que conforman el Sistema, no debería depender de ninguna de ellas, tanto productoras como compradoras, garantizando de esta forma la imparcialidad / de las decisiones que se adopten.

Con respecto a la función política, el sistema permitirá que dentro del armónico juego de las facultades constitucionales, la formulación de las política electroenergética, tanto en el orden nacional como provincial, esté a / cargo de los respectivos poderes legislativos.

La planificación en el orden nacional y el análisis tarifario, / deben realizarse contemplando las necesidades de las provincias, como órganos administradores de la comercialización del servicio y receptores de la demanda, y con la debida participación de las mismas a través del Consejo Federal de la Ener- /

gía Eléctrica, organismo que debe ser auténticamente federal y el encargado de la coordinación política.

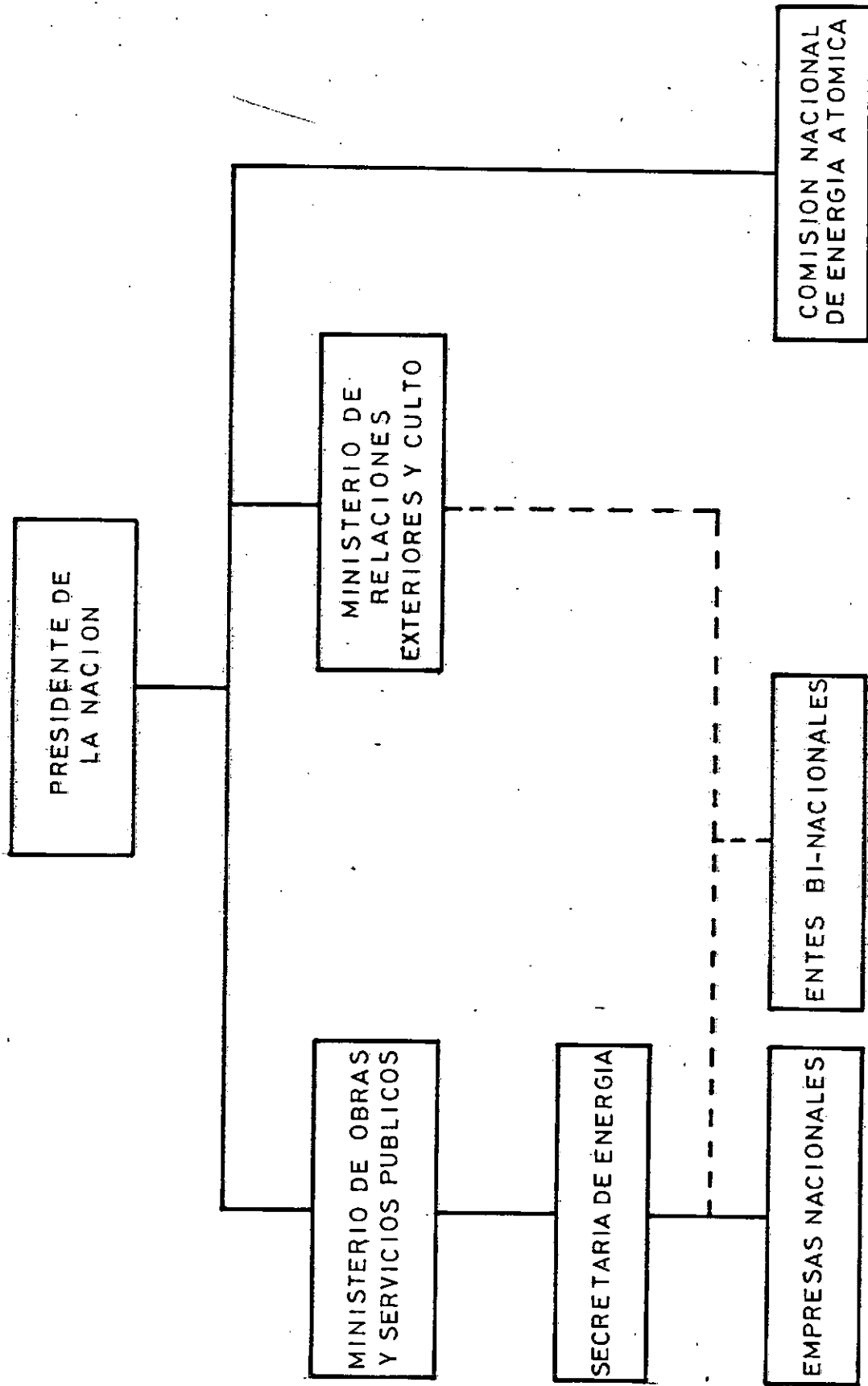
En el sistema de planificación, las empresas locales actuarán como unidades primarias, relacionandose en el orden provincial con el Ministerio de Obras Públicas como unidad sectorial y con el Organismo de Planeamiento como unidad central del sistema. En el orden nacional deberán reportar a la unidad central dependiente del Consejo Federal de Energía Eléctrica.

A los fines de optimizar la función empresaria y obtener del / conjunto de empresas la máxima eficiencia y coordinación, se hace necesario la integración de éstas en un Consejo Interempresario que actúe como órgano normativo y produzca estudios y asesoramiento en los campos técnicos, jurídico, económico, financiero y administrativo.

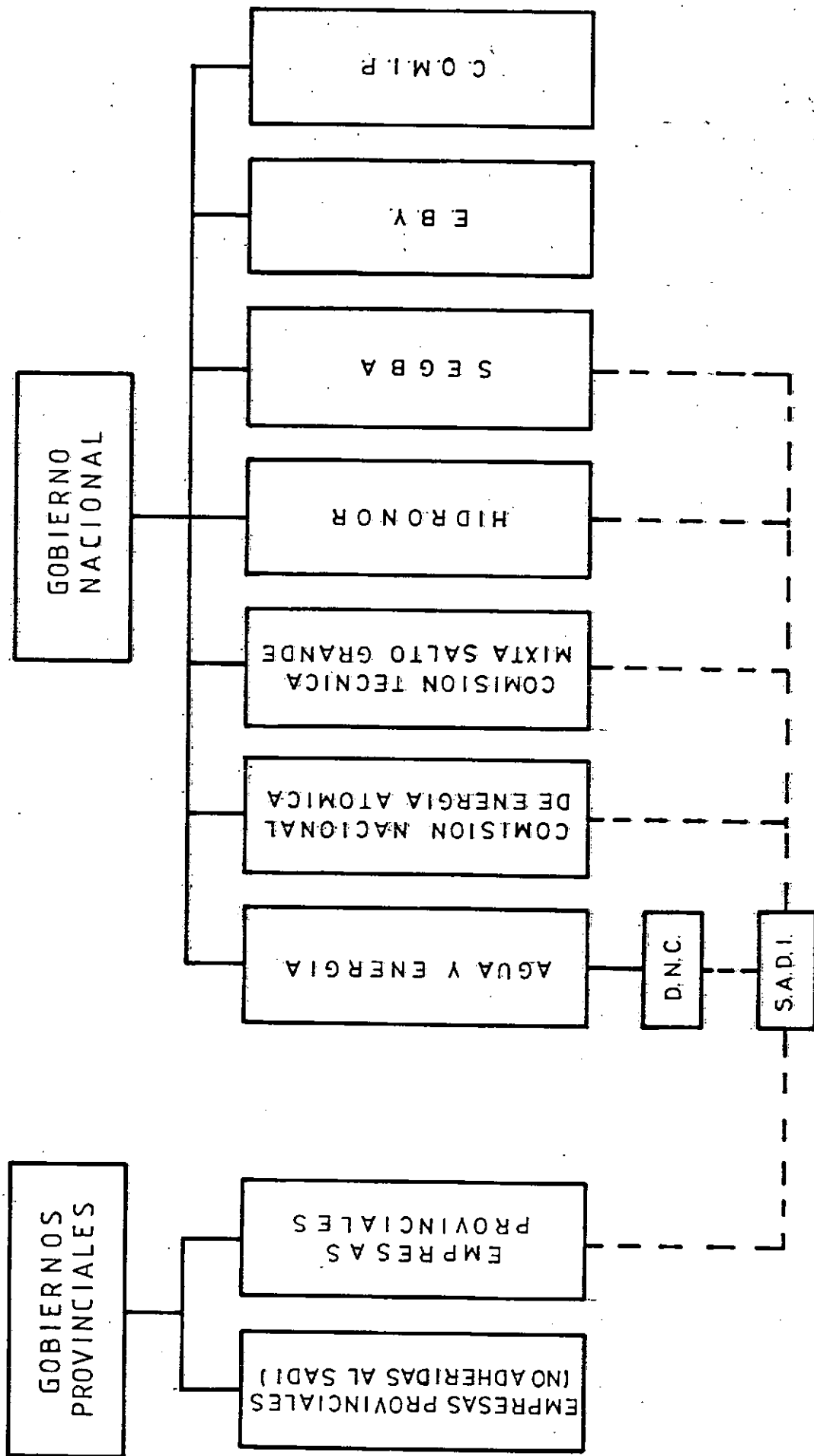
PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SECTOR

Niveles según ámbito geográfico de actuación	DE INSPIRACION FEDERAL		DE INSPIRACION CENTRALIZANTE O UNITARIA	
	Extrema	Intermedia	Intermedia	Extrema
1. En todo el territorio nacional.		Empresa Federal o Nacional que tenga a su cargo la actividad básica del sector y venda energía en block a entidades actuantes en nivel 2 (no distribuye energía a usuarios directos) sujeta a jurisdicción nacional.	Empresa Nacional que / tenga a su cargo la actividad básica del sector y venda energía en block a entidades actuantes en nivel 2 (no distribuye energía a usuarios directos) sujeta a jurisdicción nacional.	Empresa única que atienda de todas las etapas del proceso en todo el país sujeta a la jurisdicción nacional.
2. En territorio de Provincias y Capital Federal.	Empresas provinciales sujetas a jurisdicción provincial y empresa local en Capital Federal sujeta a jurisdicción nacional.	Empresas provinciales e interprovinciales y sociedades cooperativas sujetas a jurisdicción provincial y empresa local en Capital Federal sujeta a jurisdicción nacional.	Empresas regionales sujetas a jurisdicción nacional.	

SECTOR ELECTRICO DE JURISDICCION NACIONAL



SISTEMA ELECTRICO - ESQUEMA INSTITUCIONAL



BASES PARA UN ORDENAMIENTO

ELECTROENERGETICO ARGENTINO

Se propone la promulgación de una Ley de Ordenamiento Eléctrico Nacional que abroge la 14.772, la 15.336, la 17.004, y toda otra que se oponga a su contenido.

CAPITULO I - ENCUADRE

1. Se define como servicio público de electricidad las actividades de generación, transformación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, prestados en forma regular y continua para atender a / las necesidades de los usuarios, de acuerdo a las regulaciones pertinentes.
2. El servicio público de electricidad será prestado solamente:
 - a) Por el Estado Nacional y los Estados Provinciales;
 - b) Por Cooperativas eléctricas sometidas a jurisdicción provincial, y exclusivamente mediante las autorizaciones que en cada caso correspondan.
3. A partir de la promulgación de la Ley que corresponda, no se otorgarán ni renovarían autorizaciones a excepción de las que soliciten los organismos a que se refieren los incisos a) y b) del párrafo anterior, estos últimos previa justificación técnica y económica.
4. Los prestadores preexistentes al régimen de la proyectada ley, coparticiparán en la prestación del servicio público de electricidad con los titulares indicados en el párrafo 2, sujetando su acción a las disposiciones contenidas en el texto de la Ley de Ordenamiento Eléctrico Nacional. Entiendese por prestadores preexistentes a aquellos que ejecutan el servicio público de electricidad en virtud de regímenes legales anteriores a su promulgación y en cada caso quedarán bajo jurisdicción local.

5. A los efectos de la interpretación de los efectos normativos entre los derechos nacidos de regímenes legales anteriores en favor de los prestadores preexistentes y las obligaciones que establecen las presentes / pautas, estas últimas son de orden público y prevalecerán en todos los casos.

CAPITULO II - JURISDICCION

I . Serán de Jurisdicción Nacional

1. Los Centros de Generación de módulo nacional y sus instalaciones complementarias.
2. Los Centros de Generación de carácter internacional y sus instalaciones complementarias.
3. El Sistema Argentino de Interconexión (SADI), constituido por las líneas de transporte y estaciones de transformación que integren el Sistema Primario de Intercambio de Energía Eléctrica en todo el Territorio Nacional.
4. Las Instalaciones Provinciales o Interprovinciales que concurren al / SADI, al sólo efecto del cumplimiento de los objetivos asignados al Despacho Nacional de Cargas quedando subsistentes los Poderes de las Provincias en todos los otros aspectos que hacen a la jurisdicción / local.
5. Todo servicio público de electricidad que se preste en la Capital Federal.

6. El Despacho Nacional de Cargas

II - Serán de Jurisdicción Provincial: Todos los otros aspectos vinculados con la prestación del servicio público de electricidad enunciados en el Artículo precedente tales como las instalaciones de Generación y / Transformación de módulo local, las líneas de Subtransmisión y Distribución de la energía eléctrica, su operación y comercialización, como así también todos los servicios auxiliares y conexos y la Interconexión de Sistemas provinciales entre sí.

La integración de una Central de Generación al Sistema Argentino de Interconexión, no implica la renuncia de la Provincia al ejercicio de su jurisdicción sobre la fuente y el respectivo servicio.

CAPITULO III - POLITICA ELECTROENERGETICA Y PLANIFICACION

1. Dentro de un armónico juego de las facultades constitucionales la formulación de la política electroenergética, tanto en el Orden Nacional como Provincial corresponde a los respectivos poderes legislativos.

2. La planificación, como instrumento de ejecución de las políticas trazadas en el orden provincial queda a exclusivo cargo de la administración local.

En el orden nacional la planificación, deberá ser la resultante de la / coordinación y compatibilización de la planificación elaborada para el Sector, que incluye la correspondiente a los emprendimientos binacionales, / con las necesidades provinciales. Su instrumentación estará a cargo del / Consejo Federal de Energía Eléctrica.

I - AMBITO NACIONAL

SECRETARIA DE ENERGIA

Serán funciones del Secretario de Energía:

1. Participar en la elaboración de los proyectos de políticas, de planes y programas operativos del área de su competencia. Evaluar y / compatibilizar resultados.
2. Elevar al Poder Ejecutivo para su aprobación, el Plan anual de Obras de la Empresa Nacional de Electricidad previa aprobación del Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
3. Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional las tarifas de la Empresa Nacional de Electricidad, propuestas por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
4. Gestionar la obtención de créditos nacionales o internacionales para reforzar las fuentes de financiación destinadas al Sector Eléctrico en su conjunto.
5. Representar al Poder Ejecutivo en el Consejo Federal de la Energía / Eléctrica.
6. Fijar la política de investigación tecnológica del Sector, aprobando los programas específicos a realizar a través de un organismo que actuará bajo su dependencia, cuya misión será lograr la independencia / tecnológica.
7. Supervisar el funcionamiento general de la Empresa Nacional de Electricidad y ejercer la función de policía del servicio.

CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGIA ELECTRICA

El Consejo Federal será el órgano asesor del Congreso y del P.E. Nacional y estará integrado por un representante por cada Provincia uno por la Capital Federal y uno por la Nación, será presidido por el Secretario de Energía y tendrá las siguientes funciones:

1. Intervenir en la formulación de las políticas nacionales que hacen al desarrollo del Sector Eléctrico en su conjunto a los efectos de lograr un suministro eléctrico eficiente, coordinado y económico.
2. Formular la planificación nacional del desarrollo del Sector Eléctrico.
3. Analizar y coordinar los planes de obras de la Nación y las Provincias.
4. Estudiar y proponer el régimen tarifario a aplicar entre todos los integrantes del Sistema Eléctrico Argentino, comprendiendo las transacciones en el Sistema Argentino Interconectado y los resultados de la coprestación del servicio.
5. Supervisar el Despacho Nacional de Cargas y establecer las normas técnicas de operación y distribución.
6. Estudiar y efectuar recomendaciones referentes a la integración / del Fondo Eléctrico Nacional.
7. Proponer las pautas políticas para los programas de investigación tecnológica y desarrollo industrial del sector.

8. Evaluar anualmente el cumplimiento de las políticas, planes y programas referidos al desarrollo electroenergético nacional, produciendo las correspondientes recomendaciones.
9. Laudar por divergencias que se susciten entre los entes provinciales, regionales y nacionales, ello sin perjuicio de los derechos / otorgados por el artículo 100 de la Constitución Nacional.
10. Establecer su estructura orgánico-funcional.
11. Dictar su propio reglamento interno, que incluirá la facultad de / autoconvocarse.
12. Todos los gastos de constitución y funcionamiento del Consejo, serán solventados por la Nación y las Provincias en la forma que lo determine su reglamentación.

El Consejo Federal integrará un Comité Ejecutivo formado por cuatro / miembros uno por la Nación y tres por las Provincias, a propuesta de aquel, del cual dependerán las áreas de Planeamiento y Tarifas y será el encargado de la supervisión y control del Despacho Nacional de Cargas.

II - AMBITO PROVINCIAL

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

El Ministro de Obras Públicas o Ministro o Secretario del ramo cubrirá, a los fines del presente Ordenamiento, funciones que definan en la Jurisdicción local, competencias similares a las previstas en el Ambito / Nacional para el Secretario de Energía.

Cada Provincia estudiará la adhesión a la Ley de Ordenamiento Eléctrico/



Nacional por medio de leyes especiales, obligándose a crear el organismo que haga factible el esquema global.

CAPITULO IV - ESTRUCTURAS EMPRESARIAS

La actividad empresarial se desarrollará en dos niveles, en el Ambito Nacional actuará una sola empresa denominada Empresa Nacional de Electricidad, en / el Ambito Provincial actuarán Empresas Provinciales de Electricidad las que / tendrán a su cargo la responsabilidad por la atención de la totalidad de los usuarios de los mercados provinciales.

El Despacho Nacional de Cargas estará a cargo de un ente que cumplirá su cometido bajo las directivas técnicas y de transacciones económicas que le impartirá la Autoridad de Aplicación las cuales estarán dictadas en base a las normas fijadas por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica.

NIVEL I - EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

1. Se la constituirá sobre la base de Agua y Energía Eléctrica a la cual se le adicionará : 1) Las Centrales construídas o a construirse por la Comisión Nacional de Energía Atómica; 2) La representación nacional en las Comisiones Mixtas Internacionales y Entidades Binacionales. 3) Hidronor.
2. Esta Empresa se encargará de Generación en gran escala (el módulo será / fijado por el Consejo Federal de Energía Eléctrica) y del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)
3. La estructura jurídica de la Empresa Nacional de Electricidad se regirá por la ley 20.705 tal que asegure al Estado el dominio y el control además del manejo ágil y eficaz de la Empresa.

4. La Dirección de la Empresa Nacional se realizará a través de un Directorio designado por el Poder Ejecutivo Nacional, compuesto por cuatro Directores propuestos por el Consejo Federal de Energía Eléctrica y un representante de la comunidad de trabajo.
5. La sede de la Empresa Nacional de Electricidad estará ubicada en el interior del país, en las proximidades de su centro geográfico.
6. Serán funciones de la ENE:
 - Elaborar el programa anual de obras de acuerdo a la planificación formulada para el sector por el Consejo Federal
 - Estudiar, proyectar, construir y operar centrales de generación de escala nacional y las de carácter internacional, estaciones y redes del SADI
 - Vender energía en barras a las Empresas Provinciales o Interprovinciales.
 - Comprar y/o vender energía a otros países.

NIVEL II - EMPRESAS PROVINCIALES DE ENERGIA

1. La prestación del servicio público de electricidad en cada Provincia estará a cargo de una empresa única, definida como Empresa Provincial de Electricidad (EPE). Voluntariamente dos o más provincias podrán constituir una Empresa Regional de Electricidad (ERE).
2. La estructura jurídica de la EPE se regirá por la ley 20.705 tal que asegure al Estado el dominio y el control además del manejo ágil y eficaz de la empresa.
3. El Poder Ejecutivo Nacional, adoptará las medidas conducentes a producir las transferencias, de acuerdo con la ley 18.586, de servicios, bienes y

aportes de capital que corresponda por definición de jurisdicción provincial.

4. Las transferencias mencionadas en el artículo anterior garantizarán el traspaso del personal sin disminución de sus remuneraciones, antigüedades y derechos estatutarios, de acuerdo con la ley 18.586.
5. Del Fondo Eléctrico Nacional y en la forma que al efecto reglamente el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, se proveerán fondos a las Empresas Provinciales o ERE a fin de facilitar su desarrollo.
6. Las EPE o ERE serán las prestatarias del servicio público de electricidad en sus respectivas provincias o regiones eléctricas en las etapas / de distribución y comercialización de energía eléctrica. También tendrán a su cargo la generación de nivel provincial y la operación de los sistemas provinciales de interconexión.
7. La distribución y atención de todo tipo de usuarios finales, cualquiera sea la tensión de suministro, o cooperativas, será de exclusiva jurisdicción provincial.
8. Dentro de una Provincia las Cooperativas Eléctricas podrán prestar el / servicio en sus etapas de generación aislada y distribución en aquellos lugares donde actualmente lo están prestando y en el futuro donde las / provincias lo autoricen, otorgando la correspondiente concesión.
9. La EPE estará administrada por un Directorio designado por los gobiernos provinciales, contará con un representante de la comunidad de trabajo, y podrá integrarse, a criterio de los gobiernos provinciales, con un representante de las Cooperativas. Todos los directores deberán tener capacitación afín con el servicio público de electricidad.

10. Serán funciones de la EPE o ERE entre otras, las siguientes:

- Proponer la política energética para el desarrollo eléctrico provincial en coordinación con las políticas nacionales.
- Programar y realizar los planes de ampliación de los sistemas de la región. Tales planes serán coordinados con los del Consejo Federal / de la Energía Eléctrica y aprobados por el PE Provincial.
- Operar y mantener los sistemas de generación, subtransmisión, distribución y comercialización en sus respectivas áreas de acción.
- Elaborar y someter a aprobación del PE Provincial o concurrentes el régimen tarifario a aplicar en la región, teniendo en cuenta las políticas nacionales y provinciales de desarrollo del mercado eléctrico.
- Comercializar la energía eléctrica al usuario.
- Ejercer el poder de policía sobre los servicios eléctricos prestados en todo el territorio provincial y otorgar las autorizaciones de / prestación correspondiente o proponerlas al Poder Ejecutivo según / particulares de cada provincia. También deberá resolver o proponer sobre la incorporación o desafectación de Cooperativas como prestarias del servicio.
- Representar a la Provincia en el Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
- Arbitrar los medios para capacitar a su personal y mantener actualizados sus conocimientos con miras al mejoramiento de la eficiencia / general del servicio. También reglamentar lo relacionado con su seguridad en la prestación.
- Todas las otras funciones que además de las citadas concurren al desarrollo y mantenimiento de un sistema de distribución y comercialización de electricidad que sea eficiente y económico.

11. La atención de la totalidad de los usuarios del mercado eléctrico de la Capital Federal estará a cargo de un ente de naturaleza y competencia similar a los previstos en el ámbito provincial.

CAPITULO V - ASOCIACION DE ENTES PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD

Estará integrada por los representantes de las EPE, uno por la ENE, uno por el organismo prestador del servicio en la Capital Federal, y uno por la FACE.

La Asociación tendrá como objeto fundamental la adopción de cursos de acción tendientes a lograr una adecuada aplicación de los recursos, que permitan la máxima eficiencia empresarial con la mejor calidad de servicio. A dicho efecto tendrá, entre otras funciones, las siguientes:

1. Estudiar y compatibilizar las normas o procedimientos en materia de organización empresarial, planeamiento, programación presupuestaria y financiera, comercialización, contabilidad, producción, ingeniería, auditoría, administración de personal y control de gestión.
2. Formular criterios para la normalización de las especificaciones técnicas de materiales y procesos industriales en uso.
3. Proveer asistencia técnica, administrativa y jurídica a los organismos provinciales que así lo requieran para la toma de decisiones en temas / de su competencia.
4. Establecer pautas de apoyo y asistencia empresarial recíprocos para obtener una mayor economicidad de medios a través de la concentración de esfuerzos optimizando así la prestación del servicio.

5. Desarrollar con carácter prioritario la investigación y aplicación de la tecnología argentina dentro del campo electroenergético.
6. Desarrollar los recursos humanos a través de la promoción, difusión y realización de planes y programas de formación, capacitación y perfeccionamiento profesional.
7. Formar grupos o comisiones de trabajo con carácter permanente o transitorio, para abordar temas de interés común.

Todas las decisiones que adopte la Asociación, con excepción de las que / hacen a su funcionamiento, tendrán el carácter de recomendaciones.

CAPITULO VI - FINANCIAMIENTO DEL SECTOR ELECTRICO

Todo el Sector Eléctrico será financiado por un Fondo Eléctrico Nacional que será constituido sobre la base de un impuesto único a la venta en barras por la ENE.

Este fondo estará destinado a cubrir los requerimientos de la inversión de capital, investigación, desarrollo y compensaciones de los déficits de / explotación programados.

El mismo será distribuido entre la ENE o ERE en proporción a proponer por el Consejo Federal.

Las provincias conservarán su derecho a establecer por su parte tasas adicionales al consumo de energía.

CAPITULO VII - TARIFAS

Deberán formularse sobre estructuras que persigan como objetivo el desarrollo del mercado eléctrico (contemplando la estructura de costos).

La tarifa en barras de la ENE será única para todo el país.

A través de un mecanismo compensador financiado por el Fondo Eléctrico Nacional se nivelarán las diferencias de costos de distribución regional originadas por distintas densidades y estructuras de mercado.

La aprobación definitiva de los cuadros tarifarios será facultad de cada / poder concedente.

Las tarifas de fomento que obedezcan a políticas nacionales serán financiadas por FEN y aquellas de intereses provinciales por el respectivo Gobierno.